

Minuta de prensa

Deportaciones en la era Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a ejecutar parte de su política migratoria, lo que mantiene en vilo a varias comunidades latinas de ese país, frente a la promesa del mandatario estadounidense de realizar una expulsión masiva de extranjeros. Uno de los primeros focos se centró en Colombia, con el envío de dos vuelos con personas de esa nacionalidad desde Estados Unidos, lo que abrió una tensión diplomática entre ambos países. Esto, porque el presidente colombiano, Gustavo Petro, se negó inicialmente a recibir los vuelos, bajo el argumento de que "los EE.UU. no pueden tratar como delincuentes a los migrantes colombianos", y emplazó a ese país a darles un "trato digno".

No obstante, Trump endureció su postura y determinó la imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos y adelantó que en una semana "se elevarán al 50%". Esto, llevó a que Petro reculara y decidiera aceptar los vuelos. **En tanto, en Perú** también han recibido la ofensiva de Trump. El canciller peruano Elmer Shialer, anunció que Estados Unidos suspendió la ayuda a ese país en los programas gestionados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que incluyen gobernanza, salud, educación, desarrollo económico, medio ambiente y combate a las drogas. En ese sentido, explicó que ese país esperaba recibir 630 millones de dólares en ayuda hasta 2030, pero la entrega de fondos quedó detenida. Mientras el mundo y varios gobiernos de Latinoamérica miran las medidas impuestas por Trump, en Chile también se abre el debate. Esto, porque no se descarta que la reacción que el mandatario estadounidense tuvo con Colombia, se pueda replicar ante otras deportaciones que intente llevar adelante.

En el caso de Chile, un elemento que podría resultar preocupante, son las múltiples ocasiones en que algún alguacil estadounidense ha solicitado que se cancele el programa visa Waiver, a raíz de la serie de robos que han cometido bandas chilenas, y acusan que los chilenos llegan a Estados Unidos a delinquir. "Calculamos que hay cien equipos (bandas) chilenas de cuatro a seis personas operando en todo el país, quienes entran y salen del territorio norteamericano en ciclos", dijo en diciembre el sheriff del condado de Oakland, Mike Bouchard. Gobierno fija postura: "Hay obligación de recibirlos" La postura del Gobierno de Chile ante eventuales repatriaciones ha sido de colaboración. La ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo en conversación con Radio Infinita y citada en emol que "cuando nosotros deportamos personas a su país de origen esperamos colaboración de ese país y en general la obtenemos".

"Entonces si cualquier país, Estados Unidos o el que sea, hay chilenos que por razones legales o migratorias se les expulsa y se les devuelve a nuestro país, nosotros en eso, cuando es las coordinaciones, la información adecuada, ciertamente colaboramos. Los chilenos siempre pueden venir a Chile y cuando se les expulsa de otro país nuestra obligación es colaborar con eso", agregó. En cuanto a si importan las condiciones con que sean tratados los connacionales para acogerlos de vuelta en el país, la ministra apuntó que "cuando uno tiene certeza de que las personas que están viniendo son de nuestra nacionalidad, hay una obligación de recibirlos".

"Anticipar escenarios y estrategias de respuesta"

Más allá de la postura que ha fijado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric de recibir a eventuales connacionales que pudieran ser deportados, expertos apuntan a que el país debe estar preparado para ello en materia de recursos, infraestructura y condiciones en que puedan llegar esas personas. Esto, considerando además los niveles de migración que ya existen en Chile y que presiona las capacidades.

Pilar Lizana, experta en seguridad e investigadora de AthenaLab, comenta a Emol que lo ocurrido con el presidente Gustavo Petro, demuestra "la convicción que tiene Trump para realizar esas deportaciones masivas y que si no son recibidas, está dispuesto a tomar todo tipo de acciones". "Si bien Chile no está en el radar inicial de Estados Unidos, debiera el Gobierno formar un equipo multidisciplinario que vaya monitoreando las medidas de la administración de Trump y que permita anticipar escenarios y preparar estrategias de respuesta".

Jorge Sahd, director Centro de Estudios Internacionales UC Pese a que son países distintos, comenta que "tanto Colombia como Chile tienen ideologías distintas a la administración de Trump, y habría que ponderar qué tanto incide aquello. Pero de todas maneras, ya hay que comenzar a pensar en la infraestructura y capacidades que tenemos para recibirlos; los antecedentes de esas personas, para saber en qué condiciones vienen, si son personas que han cometido delitos allá, si tienen antecedentes acá en el país, hay que ponerse en todos los escenarios".

La idea de que Chile se debe preparar de todas formas, es compartida por Jorge Sahd, director del Centro de Estudios Internacionales UC. Según comenta, lo ocurrido el fin de semana con Colombia no es solo un mensaje a ese país, "sino al resto de Latinoamérica, de que la política de inmigraciones de Trump no admite negociaciones y que la aproximación en esa materia es del todo o nada". "Si bien Chile no está en el radar inicial de Estados Unidos, debiera el Gobierno formar un equipo multidisciplinario que vaya monitoreando las medidas de la administración de Trump y que permita anticipar escenarios y preparar estrategias de respuesta. Estamos entrando en una era de alto nivel de incertidumbre y los países tendrán que acostumbrarse a navegar en este nuevo escenario", afirmó.

Por su parte, Diego Rojas, analista internacional de la UC, añade que hay que pensar cómo este proceso va a afectar los flujos migratorios dentro de América Latina. "Porque principalmente los desplazados y el plan de deportaciones masivas que está ejecutando Trump, sí va a tener un impacto en países receptores dentro de la región de América Latina y Chile es un país bastante receptor de migrantes". "En ese sentido, el país debería prepararse en términos migratorios para ver una nueva ola de migración intrarregional, más que desplazados intentando esta vez mirar hacia el norte, sino que desplazados tratando de buscar también otros lugares donde instalarse dentro de América Latina. En ese caso Chile sigue siendo medianamente un país atractivo para los migrantes (...) y esta ola migratoria que va a generar las deportaciones masivas también podría tener un impacto en nuestro país, y podría volver a recibir nuevas olas de migrantes en los niveles que habíamos visto en años anteriores", cerró.

Guillermo Holzmann, analista internacional de la PUCV, comenta que "respecto a América Latina Donald Trump actúa y luego conversa. Respecto a Rusia, Unión Europea, China, primero señala situaciones, hace afirmaciones, establece condiciones, pero no actúa. Para

Trump, la situación con América Latina es 'al garrote', y particularmente con gobiernos socialistas y progresistas". "Considerando todo ello y teniendo presente que en Chile hay un gobierno progresista, es necesario tener presente que la Visa Waiver en realidad es uno de nuestros menores problemas, aunque sea una medida que el gobierno de Donald Trump pueda imponer rápidamente", añade. En esa línea, sostiene que Chile debería "preocuparse mucho" de lo que ha ocurrido con Colombia, "y Chile debería ser capaz de anticiparse, considerando nuestra posición geoestratégica y geoeconómica, a pesar de ser una economía pequeña, en términos de la dependencia que tenemos de nuestras exportaciones hacia Estados Unidos, y considerando que la primera reacción pragmática de Trump respecto a una decisión del gobierno para los intereses y la seguridad nacional estadounidense es aumentar aranceles". "En segundo lugar, tenemos una presión importante respecto a lo que es nuestra dependencia en la Unión Europea, que hoy día está en una confrontación o en un escenario de profunda diferencia con Estados Unidos, y para qué hablar de nuestra dependencia de China", zanjó.

Minuta

Gobierno presenta 12 nuevas indicaciones a la reforma electoral: 4 de estas buscan modificar el voto extranjero

1.- Antecedentes

El Gobierno presentó ante el Senado una serie de indicaciones que buscan ajustar la reforma electoral que impone multas a los electores que no asistan a votar. Se trata de 12 cambios, 4 de los cuales se centran en limitar el derecho al voto de los extranjeros, en un movimiento que ha generado debates sobre la inclusión y la participación ciudadana.

La reforma, coordinada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, plantea que los extranjeros habilitados en el Padrón Electoral del Extranjero, ya sean chilenos residentes en el exterior o ciudadanos de otros países, queden exentos de la multa por no votar.

Además, se establece que solo podrán participar en elecciones municipales y plebiscitos comunales, consignó *La Tercera*.

Una de las medidas clave de las indicaciones es la exigencia de un certificado de antecedentes penales para los extranjeros que deseen ser incluidos en el padrón electoral chileno.

Este documento, que no podrá tener más de 30 días de antigüedad, deberá ser presentado al Servicio Electoral entre 170 y 140 días antes de las elecciones o plebiscitos.

No obstante, la discusión de estas modificaciones se pospuso hasta marzo debido al receso legislativo en febrero.

2.- Reacciones

Como un "cálculo electoral" calificó el senador demócratacristiano Iván Flores la propuesta del Gobierno para restringir el derecho a voto de los extranjeros. "Aquí tenemos otro problema: tenemos a los extranjeros que han estado más de cinco años y, de hecho, hay extranjeros que están hace ocho o hace 10 años, que tienen hijos ya criados en Chile, que son chilenos y que participan de la vida nacional", afirmó el senador Flores.

"Empezar a hacer cálculos electorales para restar a personas que efectivamente han estado hace mucho rato en Chile y se van a seguir quedando en Chile, que son los extranjeros regularizados, a mí me parece que eso es sacar la calculadora. Yo creo que es un cálculo electoral", cuestionó el militante DC.

La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, dijo en Radio Cooperativa que "evidentemente aquí hay intereses de la derecha, porque quiere que los migrantes no entren, que los extranjeros sean expulsados, que sean encarcelados, que sean perseguidos, pero que puedan votar. Entonces hay una contradicción de la derecha, nosotros creemos que los extranjeros tienen derechos, pero en ningún país del mundo tienen la facultad de votar incluso en las elecciones presidenciales como es aquí en Chile".

En paralelo, el senador Esteban Velásquez (Federación Regionalista Verde Social) consideró "adecuadas y pertinentes las indicaciones del Ejecutivo, porque se establecen

condiciones que son necesarias para regular de buena manera la participación de los extranjeros".

Ossandón: "Es necesario poner más requisitos, no negarles el voto"

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado —que tramita la reforma—, Manuel José Ossandón (Renovación Nacional), dijo que no es partidario de negar el voto a los extranjeros, pero sí coincide en imponer más requisitos, como un mínimo de cinco años de residencia definitiva.

"Yo creo que es necesario poner más requisitos a los extranjeros para votar, no negarles el voto. Por lo menos, podría ser que tengan un mínimo de cinco años de residencia definitiva y ahí voto obligatorio igual que todos los chilenos, pero que sea gente seria y que le interese lo que pasa en Chile", señaló el parlamentario.

"Tenemos que buscar un equilibrio y sentido común para esto. No es una conveniencia para la izquierda o para la derecha porque eso, además, cambia con el tiempo", agregó Ossandón.

Iván Moreira, senador UDI, comentó que "hoy indudablemente el votante, si no hay un límite, nos va a favorecer a nosotros, la centroderecha, al centro y por eso la izquierda y el Gobierno están poniendo una serie de trabas, pero más por un tema electoral de conveniencia".

3.-Comentario crítico

Hace cinco años, fue el entonces senador Álvaro Elizalde, el PC y el Frente Amplio quienes impulsaron la ampliación del voto migrante en Chile. En su momento, defendieron que los extranjeros avecindados en el país tenían el derecho a participar activamente en la democracia. Hoy, sin embargo, el mismo sector que promovió el voto extranjero ahora quiere limitarlo.

La razón parece evidente: no les gustó cómo votaron. El Gobierno ahora busca restringir el voto migrante con medidas como: (1) Limitar su participación solo a elecciones municipales y plebiscitos comunales y (2) Exigir un certificado de antecedentes del país de origen para ser incorporado en el padrón electoral.

Los senadores de la UDI habían planteado un debate razonable: que los extranjeros que voten en Chile tengan un estatus migratorio definitivo vigente. Pero Elizalde y la Segpres han optado por otro camino: restringir derechos políticos de quienes no votan como ellos esperaban. Este precedente es peligroso. Si el criterio para permitir o restringir el voto es cómo votan los electores y no su estatus legal, ¿qué viene después? ¿Limitar el voto de adultos mayores porque tienden a ser más conservadores? ¿Impedir que personas en zonas rurales participen porque no siguen la línea de la izquierda?

El problema no es el voto migrante en sí, sino el uso electoralista y oportunista que la izquierda ha hecho de él. Cuando pensaban que les beneficiaba, lo ampliaron. Ahora que

les perjudica, lo restringen. En democracia, las reglas deben ser claras y justas, sin manipulación política. Si se va a debatir la regulación del voto migrante, debe hacerse con criterios objetivos, como exigir residencia legal y definitivo vigente. Lo que no puede pasar es que las reglas cambien según la conveniencia política del Gobierno de turno.

El legado migratorio de Piñera y la injusticia de la izquierda

El debate migratorio en Chile ha estado marcado por decisiones inconsistentes y falta de voluntad política. Hoy, el Gobierno parece haber adoptado una estrategia que garantiza impunidad a quienes han cometido delitos. Resulta incomprensible que la solución para combatir los delitos transnacionales consista en liberar a narcotraficantes condenados para luego expulsarlos. Esta medida, lejos de ser una solución real, asegura que vuelvan a ingresar al país en pocas semanas.

Ahora bien, es bueno recordar el legado migratorio del expresidente Piñera, que demuestra que es posible tomar medidas concretas cuando existe voluntad política. Durante su gestión, se puso fin al "turismo laboral", que permitió que solo en 2017 ingresaran al país 130 mil haitianos y 110 mil venezolanos. Se impulsó una modificación a la Ley de Migración que buscaba ordenar el sistema, promoviendo una migración responsable. Además, intentamos cambiar en el Senado el impacto del voto migrante, estableciendo condiciones más estrictas para evitar que turistas que vivieron en algún minuto en Chile pudieran votar en nuestro país. Lamentablemente la izquierda favoreció irresponsablemente una situación con bajo arraigo.

Hoy, la izquierda ha optado por premiar a quienes ingresan clandestinamente, facilitando regularizaciones masivas -las llaman acotadas- y dándoles prioridad para acceder a beneficios estatales. Mientras tanto, quienes llevan años en Chile, trabajando y contribuyendo legalmente, deben enfrentar procesos cada vez más engorrosos y se busca limitar sus derechos políticos. La prioridad del Gobierno parece ser más ideológica que responsable, lo que genera una sensación de injusticia para quienes han hecho las cosas bien.

Ahora, si bien durante la administración anterior se avanzó en nueva institucionalidad, quedaron pendientes medidas claves, como un mayor control fronterizo y una actitud más firme por parte de las autoridades, incluyendo a sectores que fueron demasiado permisivos y cercanos a organizaciones que promueven la apertura indiscriminada de fronteras.

Chile necesita un enfoque migratorio serio, con orden y seguridad. No es sostenible seguir premiando la ilegalidad mientras se castiga a quienes han seguido las reglas. El legado de Piñera mostró que es posible establecer políticas claras y exigentes sin perder de vista la justicia y el desarrollo del país.

El gobierno que todo lo calcula mal

Si algo ha quedado claro en estos años es que el gobierno ha fallado en sus proyecciones una y otra vez. Nuestras cuentas fiscales están dañadas, ya que subestimaron el déficit fiscal, es decir gastamos más de lo que calcularon, sobreestimaron ingresos, es decir recaudaron menos de lo que esperaban, calcularon mal el endeudamiento y ahora recurren a maniobras para tapar el desorden.

El caso de Corfo es ejemplar: mientras el ministro Marcel aseguraba que el traspaso de US\$3.500 millones al fisco evitaba endeudar al Estado, al mismo tiempo Corfo pedía créditos por US\$1.000 millones a organismos internacionales. ¿Por qué una entidad con excedentes necesitaba endeudarse? La única explicación es que el gobierno retiró recursos para disfrazar el déficit y luego intentó cubrir el vacío con deuda.

Este desorden fiscal tiene consecuencias reales. Mientras Corfo financia proyectos de hidrógeno verde con plata prestada, en el hospital Van Buren se suspenden cirugías por ratones porque no hay dinero para pagar la desratización y en el Hospital de Iquique apenas lograba mantener la urgencia funcionando este último año.

En paralelo, mientras nos dicen que estamos mejor en ingresos ilegales, según el INE, en dos años la cifra de inmigrantes irregulares se ha triplicado, donde a fines del 2023 superan los 336.000, y el sistema de expulsiones sigue paralizado. Las cárceles tienen el doble de extranjeros que a fines de 2021, pero no hay voluntad política para deportarlos.

Los errores de cálculo también afectan áreas clave: en salud, en cupos en educación, y la falta de fiscalización laboral y aduanera permite que el contrabando y la informalidad sigan creciendo. Ante esto, el gobierno defiende los privilegios de extranjeros que ingresan clandestinamente y su acceso prioritario a servicios, mientras sigue contratando a sus amigos con sueldos millonarios.

La realidad es que este gobierno no solo se equivoca en sus cálculos, sino que se hace trampa en el solitario. Insisten en una planificación defectuosa, usan a Corfo como caja chica y mantienen un nivel de improvisación que ya nos está costando caro. Es hora de que el país deje de pagar la factura de un gobierno que administra a punta de parches y excusas.